

MÁS IGUALDAD, MÁS ESPAÑA

Por JOSÉ BONO. Ministro de Defensa

CON motivo de la Pascua Militar, afirmé que una buena hoja de ruta para nuestro futuro sería «más libertad, menos fronteras, más solidaridad y más Constitución. Es decir, más España».

A nadie extrañó el canto a la libertad, a la reducción de fronteras, a la solidaridad y a la Constitución. Pero, lamentablemente, molestó en ciertos ámbitos que un socialista hablara de más España.

Pertenezco a una de las grandes naciones del planeta, sin cuya aportación el mundo estaría notablemente incompleto. No definiendo la España rancia e intransigente, la que estaría irremediabilmente hecha desde los Reyes Católicos. No; me identifico con la España que hacemos, con la que nos garantiza la igualdad de oportunidades. Un ministro de España no puede ser, y yo no lo soy, un apátrida funcional para dar gusto a arbitristas de ocasión.

¿Podrá un francés hablar bien de Francia, un alemán de Alemania y, sin embargo, tendrá un español que pedir perdón por proclamar su pertenencia a una España solidaria e incluyente? Definitivamente, no. Hablar bien de España no es propio de franquistas irredentos o trasnochados doctrinarios.

Empobrecedora y aldeana es la afirmación de la patria chica cuando sólo se sabe hacer a costa de negar un territorio de convivencia más grande y mayoritariamente reconocido, es decir, la España que ampara la igualdad de todos los españoles y garantiza una descentralización superior a la de muchos estados federales.

El día de Navidad estuve en la antigua Yugoslavia, donde nuestros soldados defienden con su presencia la difícil convivencia entre quienes han sido infectados por el virus de un nacionalismo voraz. Allí se atizó el resurgir de las patrias menores...y ya van por ocho. Eso sí, siguen necesitando soldados extranjeros para vigilar los efectos de la infección. En Bosnia, en Kosovo, se ha demostrado la dificultad de resistir en paz el fanatismo de lo puro contra lo mestizo y la reivindicación de derechos ancestrales frente a las democráticas normas de convivencia.

En España se observan síntomas de esa dinámica de reivindicación de los ancestros y de diferenciación a cualquier precio. La apelación al Rh como elemento de pertenencia fue muy ilustrativa. Los planes soberanistas suponen, a la vez, un desafío al Estado y un desprecio al derecho de los ciudadanos garantizado por la Constitución que otorga el mismo valor al voto de un valenciano que al de un vasco a la hora de modificar su contenido.

Sólo por la fuerza podría una provincia, un municipio o una comunidad

autónoma separarse de España sin seguir el trámite de modificar la Constitución.

La propuesta del gobierno vasco es políticamente peligrosa porque plantea una situación de ilegalidad con el disfraz de la legitimidad popular. ¿Cómo integrará Ibarretxe en su conciencia el desprecio que su propuesta supone para la mitad de los ciudadanos vascos? ¿Tendrá el apoyo espiritual de los obispos católico-nacionalistas? ¿Ha pensado Ibarretxe dónde tendría que buscar cobijo si en España no hubiera Constitución? La última respuesta es clara: en el mismo sitio que se ampararon los luchadores antifranquistas durante la dictadura. Aunque le incomode reconocerlo, no habría lendakari si antes no hubiese habido Constitución.

Su envite está envuelto en un envenenado dilema: diálogo o tortas. Propone discutir sobre algo que es innegociable mientras no se reforme la Constitución: la soberanía indivisible del pueblo español.

El órdago requiere una respuesta serena pero firme. No sólo por la semilla de insolidaridad que encierra, sino por el peligroso efecto de imitación que tendría una vez dinamitado el principio constitucional de igualdad de los españoles.

Algunas actitudes recuerdan aquellos años de nuestra infancia cuando en las escuelas se ponía más énfasis en los accidentes geográficos (los ríos, las cordilleras, las fronteras -se decía-, «que nos separaban de Francia»); que los «accidentes» que determinaban la vida de las personas como la opresión, la dictadura y la desigualdad.

Me pregunto cuánto hay de artificial en estas reivindicaciones identitarias que tienen poco que ver con las preocupaciones cotidianas de la inmensa mayoría de los españoles, vascos incluidos. ¿No serán la vivienda, el empleo, la educación de los hijos, la salud, la calidad de vida, la felicidad ... las verdaderas inquietudes?

Es verdad que cualquier relación social, cualquier Constitución es revisable, pero hay que tener cuidado y respetar las reglas del juego; porque, en el caso del orden constitucional, las instrucciones aparecen en el mismo libro que las cláusulas de garantía.

España es un país culturalmente rico y socialmente plural; quizá por eso nuestros grandes acuerdos, cuando los logramos, tienen tanto valor. El que alcanzamos hace más de un cuarto de siglo nos dice que optar por el progreso de todos no significa difuminar el valor de las diferencias, pero no debemos transformar la evidente pluralidad de España en arma arrojadiza o coartada para el privilegio. Sólo los insolidarios, los que no desean compartir, apuestan por la disgregación.

Reconforta saber que para la mayoría de los españoles, por encima de cualquier identidad de territorio o de sangre, la España que cuenta es la de los

ciudadanos, en la que el reconocimiento de la diversidad no implica el derecho de ninguno a ser más que otro.

Como socialista he aprendido a beber de la igualdad y de la solidaridad que brota a borbotones de la Constitución y del manantial de las Autonomías. Como español, confío en que prevalezcan aquellos valores colectivos que nos hacen sentirnos históricamente juntos y voluntariamente dispuestos a trabajar en el proyecto común que tenemos, el que define la Constitución.

La Constitución es nuestra garantía de libertad. Sus enemigos secesionistas han asesinado a 1.000 españoles inocentes en atentados terroristas. Tengo la serena convicción de que las instituciones democráticas y, singularmente, el Gobierno, no permitirán que se deshonre su memoria. Lo que ETA no consiguió quitándoles la vida no lo debe lograr nadie con planes contrarios a la Constitución.

Vivimos tiempos en los que el conflicto es moneda corriente, pero tengo confianza plena en que la serenidad y firmeza del presidente Zapatero son garantía de que frente al sobresalto ilícito se impondrá el sentido común y la ley. La comisión Gobierno-PP-PSOE es una buena noticia.